

VI Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente (UNL)

Eje: Organizaciones políticas y movimientos sociales.

Lic. Massano, Juan Pedro. Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Términos clave: movimiento obrero – posdictadura – alfonsinismo.

Se permite su publicación.

El movimiento obrero sindicalizado en el inicio de la posdictadura: una reconstrucción del proceso de oposición al proyecto de reordenamiento sindical de 1983-1984

En el presente trabajo, haremos una reconstrucción del proceso por el cual el proyecto de normalización sindical del alfonsinismo es presentado en el parlamento y, luego de ser aprobado en la cámara de diputados, es derrotado en la cámara alta. Para ello, utilizamos como fuente el registro completo del diario *Clarín*, desde el primer día después que el radicalismo gana las elecciones y se confirman el plan de reforma, hasta el día en que la cámara de senadores vota en mayoría contra el proyecto (1/10/83-15/3/84)¹.

Organizaremos la exposición en tres apartados, cada uno de ellos correspondiente con una división analítica del proceso. Al mismo tiempo, estos tres apartados se debaten entre tres puntos o ejes de análisis: la dinámica que corresponde a la relación entre el movimiento obrero y la política (entendida tanto como relación con el gobierno como con las instancias institucionales del Estado, en particular las distintas cámaras del parlamento) en torno a las gestiones por el proyecto de ley de normalización sindical; la dinámica de las relaciones entre los distintos nucleamientos sindicales entre sí (o dinámica inter-sindical); y la dinámica de conflictividad particular a cada gremio en las que el Ministerio de Trabajo aparece como el ejecutor de la política del gobierno (intervenciones, aumentos salariales dados por decreto, etc.).

En el primero de ellos, reconstruimos la etapa en la cual las fracciones mayoritarias del movimiento obrero reorganizan las orientaciones tácticas hacia su unidad, a partir de la caída de la hegemonía de Lorenzo Miguel por la derrota de las elecciones.

En el segundo, nos ocupamos del período que va desde la presentación formal del proyecto de normalización hasta la unificación formal de la CGT. Si bien en términos prácticos esta unidad se daba “en la acción”, a partir del proceso de oposición al proyecto terminan de delinearse los nuevos realineamientos que caracterizaran al movimiento obrero durante los primeros años de gobierno.

¹ Dichos números están a disposición pública en la Hemeroteca de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de la Plata y en la Hemeroteca de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

En el tercer y último apartado, reconstruimos la etapa en la que el gobierno es derrotado en la cámara alta, y sus intervenciones dentro del campo sindical para fortalecer un gremialismo afín quedan mucho más claras por la política de intervención de los grandes gremios y el pleno acercamiento tanto a la Mesa de Enlace Gremial (que no sobrevivirá al proceso) como a “los 20”.

1. La caída de Lorenzo Miguel

1. a.El horizonte de la unidad

Hasta el resultado de las elecciones de octubre de 1983 Miguel era el hombre fuerte del sindicalismo peronista. Su posición dentro del movimiento era inmejorable dado que era el vicepresidente 1º del PJ² y el secretario general de las 62 organizaciones peronistas.

Pero la derrota electoral dispara críticas a la conducción del justicialismo. Ubaldini declaraba que el sindicalismo debía volver a la actividad reivindicativa, en un intento de separar públicamente al movimiento obrero del partido político derrotado³. El sector denominado “los 20” declaró que “perdió un sector político del peronismo, no los trabajadores” (*Clarín*, 4/11/83).

Dentro de la CGT de la Republica Argentina (CGT-RA)⁴ empiezan a mostrarse las diferencias con “las 62”, y el eje de la relación entre las dos centrales sindicales y la política sindical irá virando hacia el planteo de la unidad del sector prescindiendo de la conducción del dirigente metalúrgico.

Las reuniones entre los nucleamientos para analizar la situación se suceden, pero no hay ninguna entre las centrales. Dentro de la CGT-RA, “los 25” pujan para que no haya reunión conjunta con “las 62” para que no ocurra una fractura, y hay algunas críticas internas a Ubaldini por su silencio sobre la figura de Miguel.

“Los 25”, que habían perdido la interna del PJ (habían apoyado a Cafiero contra Iglesias en provincia de Buenos Aires), ahora estaban en mejores condiciones. “Gestión y Trabajo” y “los 20” también habían perdido con sus candidatos (Robledo y Matera), y entre los tres nucleamientos pidieron la unidad de la central y que se vaya Miguel, conformando una conducción común con

2 En términos reales, la cabeza del partido, dado que la presidente era Isabel Perón, radicada en España.

3 Es importante a la hora de la contrastación con la fuente esta aclaración de “separación pública” del movimiento obrero y el partido. Al diario y sus columnistas se les escapa que es insostenible una separación real de tales momentos organizativos. Para nombrar solo algunos componentes del problema, ni la derrota electoral de 1983 puede llevar a abandonar las estructuras del aparato partidario, ni ninguno de los diputados y senadores de extracción sindical plantea la posibilidad de no responder al PJ en las cámaras.

El proceso de “des-sindicalización del PJ será, más bien, una iniciativa encarada desde la “Renovación” (es decir, ámbitos netamente partidarios no sindicales), y es un proceso posterior a la coyuntura que estamos analizando. Para profundizar en este problema ver Levitsky (2005).

4 Esta era la central sindical que conducía Ubaldini y que tenía por pilares al “grupo de los 25” y el sector de las 62 organizaciones que respondía a Miguel. La otra central importante era la CGT-Azopardo, integrada por “los 20”, “Gestión y Trabajo” e independientes, era conducida por un gobierno colegiado donde se distinguían Triaca (peronista de Gestión y Trabajo, de trabajadores del plástico), Etchezar (radical del MNRS, de la Fraternidad), Baldassani (desarrollista, de los trabajadores telepostales), y Luján (peronista de “los 20”, trabajadores del vidrio), entre otros.

Ubal dini como cabeza junto a Triaca, aunque Azopardo también pide a Etchezar⁵. Mientras tanto, acusando recibo de las críticas, Ubal dini sostiene que la rechifla a Miguel en Vélez (en el acto del último 17 de octubre) fue un “plebiscito contra el autoritarismo”.

El 10 de noviembre, en una nota de opinión el periodista Kirschbaum sostiene que Miguel se replegó a posiciones menos expuestas y que Ubal dini no se ofreció como alternativa rupturista acercándose tácticamente a Miguel, apareciendo como candidato a la CGT unificada. Miguel esperaba que las jugadas radicales por la normalización hicieran cerrar filas (*Clarín*, 10/11/83).

Para el 16, desde la CGT-RA se crea una comisión para unificar una central independiente de las 62. La propuesta es que la unidad se dé antes del 10 de diciembre. Un día después, la comisión se prepara para reunirse con Azopardo, aunque ésta dijo que “a algunos les agarró el apuro después de 15 días de estar callados”. La CGT-RA propondría a Ubal dini como secretario general pero Azopardo solo aceptaría una conducción colegiada. Sin embargo no asistió ningún dirigente de “los 20”. Estos y los independientes no estaban de acuerdo en que se incluya a los gremios no definidos, como UTA y bancarios. En Azopardo, los intentos internos de acercamiento eran infructuosos.

Por fin, ambas centrales definieron una reunión para el 28. Previamente, se reunió la CGT-RA con Miguel y acordaron que Ubal dini sería propuesto como titular de la conducción unificada, mientras que Azopardo podría designar al adjunto. Pero ésta, mientras tanto, “recompuso” sus relaciones internas alrededor del mutuo acuerdo de no aceptar la conducción unipersonal de Ubal dini. Como por estas posturas no llegaron a un acuerdo, se pasó a cuarto intermedio. Luján⁶ no fue a la reunión y fue reemplazado por Barrionuevo⁷.

Hacia el 8 de diciembre se anuncia que las dos CGT acordaron un cuerpo colegiado de 4 secretarios generales. Lo que todavía no se sabe es cómo será la representación de los grandes gremios intervenidos. Una preocupación importante de las dos centrales era que cada sindicato debía resolver sus problemas internos para que no se proyecten en la negociación de la unidad.

Pero unos días después la CGT-RA propuso que sea cada central la que designe los representantes a la conducción unificada, mientras Azopardo sostenía que cada sindicato designe su propio representante sobre la base de la decisión de sus cuerpos orgánicos, diferencia que se hace

⁵En octubre último se creó el MTR (movimiento de trabajadores radicales) que junto con la comisión sindical del Comité Nacional del partido apoyan al alfonsinismo. Habían sido parte de la formación del Movimiento Nacional de Renovación Sindical (MNRS). Al principio, el MNRS era presidido por Biafore (textil) afín a Piccinini. Alfonsín les había prometido revisar la actuación militar en las intervenciones.

⁶ Si, como se estaba negociando, la nueva CGT unificada adoptaba una conducción efectiva con 4 secretarios generales, Luján quedaba en quinto lugar, porque dos de esos cargos serían ocupados por gremialistas de la CGT-RA, y los otros dos a ocupar por Azopardo eran para Triaca y algún sindicalista no peronista de peso como Baldassani o Etchezar.

⁷ Proveniente del gremio de fideeros y parte del grupo de “los 20”, luego de la derrota del proyecto de normalización será asesor presidencial de Alfonsín.

notar en gremios grandes como SMATA. La CGT-RA sostenía que ellos ya habían cedido frente a la propuesta de la dirección colegiada y que ahora le tocaba ceder a Azopardo.

1. b.El proyecto de ley dinamiza políticamente al sindicalismo

Ya para el primero de noviembre la democratización sindical estaba en la agenda, y consultado sobre el tema Ubaldini reivindicó la ley 20615⁸. La ley de normalización se plantearía en breve y gremios importantes empezaron a tomar postura. El problema para el gobierno sería cómo normalizar mejorando la correlación de fuerzas con la dirigencia peronista antes de que reaccione.

Inmediatamente al resultado de las elecciones ambas centrales piden al gobierno militar la devolución de los bienes de la CGT. La CGT-RA preparaba un paquete de reivindicaciones donde pedía la participación de los trabajadores en los entes estatales, la normalización total y la convocatoria a negociaciones colectivas (bajo la ley 14250). También la reimplantación de la antedicha ley 20615 y de la 18610 (obras sociales). Sostenían la necesidad de la investigación sobre muertos y desaparecidos. El alfonsinismo, mientras, se muestra inflexible en sus negativas sobre la devolución de las obras sociales y que los trabajadores participen en las empresas estatales, y busca revitalizar los sectores sindicales donde tiene conducciones afines.

En cuanto a la normalización sindical, desde principios de noviembre la mayoría de los gremios piden un esquema de elecciones de “abajo hacia arriba”, como será parte del proyecto de ley. Este procedimiento, que la historiografía suele subrayar como garantía de renovación sindical, es sostenido públicamente por las conducciones sindicales desde mucho antes de la presentación del proyecto⁹. El procedimiento por sí mismo, y enunciado en abstracto, no es garantía de democratización alguna: el gobierno y las conducciones sindicales puján por el control del procedimiento electoral desde la justicia electoral o desde junta electoral sindical, respectivamente.

⁸ La ley 20615 de asociaciones profesionales de los trabajadores, sancionada por el gobierno peronista en 1973, fue derogada por la dictadura militar mediante la Ley 22105. La 20615 reproducía y profundizaba el modelo sindical de concentración de poder en las direcciones y de dependencia estatal desarrollado durante el primer peronismo, como resultado de las pujas frente al movimiento anti burocrático del ciclo 69/73 (ver Campos, 2008). Sin embargo, sancionaba una importante presencia del sindicato en el lugar de trabajo y su derogación, junto con la anulación de los convenios colectivos y el mecanismo de paritarias, fue parte del andamiaje legal complementario de la política represiva de la última dictadura militar.

⁹ Por ejemplo, el 7/11/83 una solicitada de listas participantes de la comisión transitoria de SMATA pide una normalización que privilegie la “soberanía del afiliado”, empezar por elecciones de delegados para que estos sean candidatos a las elecciones nacionales, adecuar los estatutos a la necesaria renovación de cuadros, y someterlos a aprobación de los afiliados. Que la ley de asociaciones gremiales sea aprobada por vía parlamentaria y derogación de la ley de la dictadura. Depuración de padrones y llamar a elecciones en 90 días como mínimo.

Así mismo, el 10/11/83 se publica una solicitada de las Agrupaciones Sindicales Peronistas, coordinación nacional provisoria, que apoya a Ubaldini, repudia a la conducción del PJ, y pide democracia sindical de abajo hacia arriba, devolución de las obras sociales, y libertad de los presos políticos, aparición con vida de 30000 desaparecidos, retorno de los exiliados, rendición de cuentas y reparación del pasado.

A esta altura también hay rumores de que el gobierno planteará una política de intervención de sindicatos, generando repudios de secretarios de ambas centrales sindicales. Voceros del próximo gobierno, sin embargo, declaran que no habrá intervención masiva ni se los declarará en estado de asamblea. Sí se impulsaría la revisión de los estatutos aprobados por el gobierno militar argumentando que con ello buscan la participación de las minorías. Pero no dicen nada de derogar la ley militar.

Ni bien pasan las elecciones, el 5 de noviembre el ministro de trabajo del gobierno militar congela todas las decisiones sobre sindicatos poniendo como alternativa a las intervenciones la designación de delegados normalizadores. Ese mismo día la UOCRA rechaza al delegado normalizador que reemplazaba al interventor, y 60 de las 64 seccionales declararon estado de alerta y movilización pidiendo una comisión transitoria. Unos días después renunció el interventor de la CGT culpando al sindicalismo por demorar la devolución de la central. Según su denuncia, los principales representantes gremiales no querían armar una comisión con todos los sectores.

Una vez que se conoce que Mucci será el próximo ministro de trabajo, éste pide por una sola CGT “pluralista y democrática”. Sostiene que los cambios que se van a implementar buscan no ser cómplices del proceso encarado por los militares, denunciando a los mandatos prorrogados como una “emergencia nacional”. Se estima que los salarios se concertarán recién cuando los gremios se normalicen y, hasta tanto, se fijarán por decreto del poder ejecutivo. En opinión del futuro ministro, la CGT debía ser única pero no “al servicio” de un partido político, y las obras sociales volverían a los sindicatos pero bajo control del estado.

Para el 10 de noviembre, el costo de vida subía 17% y Luján y Baldassani elogiaban a Mucci, sosteniendo que “el gobierno sigue la política peronista sobre sindicatos”. El 11, Etchezar y Luján entregan una declaración de la CGT-Azopardo a la prensa, abogando por una sola CGT y la defensa de la democracia, y sostienen que el gobierno “no debe asustarse” del poder del movimiento obrero. Así mismo, piden la restitución de la ley laboral anterior a la de la dictadura. Mientras tanto, la CGT-RA también forma una comisión para coordinar con los diputados del PJ, previendo que la normalización se planteará primero por ésta cámara, donde los radicales tienen mayoría.

El 23 de noviembre se reunieron Alfonsín y Mucci para analizar los detalles de la ley sindical. Se rumoreaba que el llamado a las elecciones de base se adoptaría inmediatamente asumido el gobierno (sin pasar por el parlamento). Alfonsín se reunió también con Mucci, Grinspun y López para fijar el próximo aumento salarial¹⁰ y la normalización sindical. López consideró negativo despolitizar a los gremios pero sí que había que evitar que se sectoricen y pertenezcan a un

¹⁰ El gobierno pensaba en dar sumas fijas en vez de aumentos porcentuales, teniendo en cuenta la experiencia del Rodrigazo, donde los sindicatos particulares se despegaron de la CGT y negociaron aumentos muy por encima de los porcentajes decretados. Finalmente, la suma fue de 1000\$ y se pidió a los empresarios no trasladarla a los precios.

monopolio político. También adelantó una próxima reunión de Alfonsín con el MNRS, pero dijo desconocer si recibiría a las CGT. Matzkin, futuro secretario de trabajo, aseguró que se garantizaría el derecho de huelga.

Durante el periodo extraordinario de sesiones parlamentarias el radicalismo propuso la ley de reordenamiento sindical, y recién para las ordinarias dejó las modificaciones a la ley de asociaciones profesionales. Habría sindicato único por actividad y no tendría personería gremial el sindicato que haga política partidaria o de comité¹¹. Si bien los miembros del futuro gobierno sostenían que era falso el trascendido de eliminación de las uniones sindicales (UOM, UOCRA, etc.), durante su mandato seguirá rigiendo de hecho la ley de los militares que no las contempla.

Mientras tanto, Alfonsín seguía dándole aire al MNRS y mantenía al azopardismo como interlocutor frecuente para no generar conflicto en los primeros tiempos de gobierno.

Diciembre comenzó con la seguridad del fracaso de la unidad de las CGT antes del 10. Sin embargo, se creó una comisión inter-CGT para plantear las posiciones gremiales frente al nuevo gobierno. “Seguiremos juntos, no unidos, pero juntos” dijo Triaca (*Clarín*, 1/12/83). Aseguraron, sin embargo, que no iban a esperar a la normalización para la unidad. Las dos CGT se juntaban para elaborar la táctica común frente al gobierno y el problema de las condiciones de la unidad quedaba postergado¹².

Los 20 y el MNRS, sin embargo, esperaban los primeros pasos de la política laboral de Alfonsín para tomar una resolución, bajo la posibilidad de volverse apoyo crítico. En ese marco, la fórmula de la inter-CGT fue propuesta por Barrionuevo porque mantenía la autonomía organizacional.

El 8, Triaca hizo declaraciones contra el proyecto de obras sociales. La dirección sindical aceptaría el contralor estatal siempre y cuando no separen las obras sociales de los gremios. Ya para esta época se rumorea el proyecto de plan nacional de salud. Los sindicalistas no fueron invitados a la asunción presidencial del 10. Solo estuvieron el MNRS y Juan José Zanola por los bancarios.

Algunos gremialistas dijeron que no se opondrían a las minorías pero que querían volver a las paritarias para discutir salarios. La ley de reordenamiento sindical era menos temida que la de asociaciones profesionales y la de obras sociales. La unidad se daba de hecho en la acción, si bien esta no era demasiado beligerante.

¹¹ Como se saca la personería, el gremio no puede recaudar dinero de los afiliados ni firmar convenios.

¹² Mientras tanto, Mucci declara que los sindicatos no deben hacer política, que es para los individuos en los comités. Grinspun anuncia que dará un aumento en diciembre sin devaluación brusca, mientras hay alzas de tarifas entre el 28 y el 30%. Sostiene también que la concertación no se dará desde el inicio hasta que se consideren quienes son los actores representativos de los distintos sectores, y que el gobierno se iniciará con una “batería de medidas de emergencia”.

El 14 de diciembre, las centrales obreras se entrevistan con el presidente de la cámara de diputados y analizaron los argumentos por separado antes de la reunión. Unos días después se entrevistan con el presidente de la cámara de senadores acompañados por los senadores de extracción sindical. Los gremios preparaban un proyecto de normalización sindical alternativo.

Para entonces, Mucci le dijo al MNRS que no estaba conforme con el aumento de 1000 \$a que dio el presidente pero que los aumentos irían mejorando con el tiempo, pero que ahora no era posible. El MNRS igualmente dio su apoyo y solicitó al ministro la separación de gremialistas que estuvieran al frente de sindicatos y no hayan revalidado el cargo por medio de elecciones.

Por otro lado, en la dirección sindical mayoritaria el aumento generó descontento. Curiosamente Etchezar dijo que el gobierno no cumplió con lo prometido. Triaca dijo que el aumento los aleja de los acuerdos básicos para consolidar la democracia porque el gobierno benefició a otros sectores y no a los trabajadores, y subrayó que como se sabía que iban a aumentar los salarios hubo mucha remarcación de precios. Luján calificó de insuficiente todo aumento inferior a los 2000 \$a.

1. c.El panorama hacia dentro de los gremios

Mientras comenzaban a conocerse las críticas a Miguel, la UOM se reúne para contener la diáspora de dirigentes internos. El 4 de noviembre 12 de 63 seccionales pidieron la renuncia de Miguel (entre ellas, La Plata, V. López y la línea Calabró). Al día siguiente, las seccionales azopardistas y las de “los 25” volvieron a pedir su renuncia. El 12, la seccional Caseros sostiene que el gremio va a respaldar a Miguel contra las 12 seccionales que se pronunciaron en su contra. El 21 un plenario analiza la posibilidad de un paro por aumento salarial, y remover a Miguel del gremio. Éste depende de la actitud que tome el sector Azopardista que responde a la seccional Avellaneda de Guerrero, que si se sumara haría que Miguel quedara en minoría.

Al día siguiente, después de que el gremio resolvió un paro nacional de 24 horas para el 2 de diciembre, el plenario pasó a cuarto intermedio aunque se sabía que Miguel sería respaldado para no quebrar la unidad. Se decide postergar las definiciones sobre la política interna hasta resolver el problema salarial¹³. Sin embargo, hacia fin de mes se incorporaron tres seccionales más al cuestionamiento a Miguel (San Miguel, Tucumán y Leones). Recién el 30 la UOM capital (una de las más grandes) lo respaldó y pidió la expulsión de quienes piden su renuncia, “por divisionistas”.

El Ministerio de Trabajo exhortó a la UOM a levantar el paro dos días antes, pero las asambleas de las fábricas ratificaron la huelga y al final se acató parcialmente (era el primer paro de la UOM desde 1976). No se plegaron varias seccionales¹⁴, pero se estimó que llegó al 90%. Algunas

¹³ El gremio venía de una experiencia muy particular con respecto a la lucha salarial porque en 1973, por quedar rezagados salarialmente, algunas fábricas se pasaron de la UOM al SMATA, que tenía mejor convenio.

¹⁴ San Martín, Puerto Madryn, San Nicolás, Concordia y Tierra del Fuego, entre otras.

patronales en Mendoza y Córdoba dieron aumentos de más del 50% para evitarlo. Las críticas a Miguel se diluían bajo la dinámica salarial, pero se reactualizaban por afuera del gremio cuando Isabel Perón criticó el manejo de la campaña electoral.

Al mismo tiempo, algunos gremios empezaron a llamar a elecciones para normalizarse antes de la sanción de la nueva ley de reordenamiento. El 11 de noviembre Luz y Fuerza Capital Federal¹⁵ llama a elecciones para enero. SMATA, por su parte, programa elecciones para abril desconociendo la ley 22105.

La Federación de Empleados de Comercio pidió que sean los gremios los que se den las pautas para la normalización, y el gremio de los trabajadores bancarios¹⁶ pidió la vuelta al andamiaje legal anterior a la dictadura en cuanto a obras sociales, estabilidad, convenio, etc. UOCRA decidió no normalizar hasta que Alfonsín no llame a elecciones en los gremios. Mientras tanto, la comisión transitoria de Luz y Fuerza nacional, dirigida por Aldo Serrano, reunida con las 40 seccionales, decreta un paro y movilización porque el Ministerio había condicionado arbitrariamente el acta acuerdo que restablecía la vigencia del convenio de 1975.

El Ministerio de Trabajo y la Justicia suspendían las elecciones de la Unión Ferroviaria, por objeción de los radicales que acusaban a la conducción de usar al gremio para beneficiar una sola lista. Según ellos, la conducción original fue desplazada por acuerdos entre la lista verde y las autoridades del Ministerio en la comisión transitoria que reemplazó al interventor en febrero de 1983. La conducción del gremio apela la decisión judicial, y la CGT-RA también rechaza la postergación de las elecciones. Diputados del PJ elevaron el problema al partido y lo atribuyeron a presiones del nuevo oficialismo. Ninguna de las listas del gremio pertenece a los radicales (MNRS), que tienen presencia pero sin estructura. Un día después, el Ministerio intima a Luz y Fuerza a cesar con las medidas de fuerza, y también prohíbe la organización de las elecciones de SMATA para abril.

El 24 de noviembre, el Secretario General de papeleros acusó a Alfonsín de intervenir en la vida política interna del gremio, porque recibió a Alari¹⁷, dirigente que no era parte de las autoridades “legítimamente constituidas”. Alari denunció el funcionamiento de la federación a Alfonsín “puenteando” a las actuales autoridades del Ministerio de Trabajo, y el presidente prometió que no habría “más irregularidades”. Alari, acusó a Donaires de haber sido en los últimos ocho años

15 Seccional que contaba en su estatuto con representación de minorías, el titular de su comisión transitoria era Lezcano.

16 Juan José Zanola era su secretario general, era el único gremio grande ya normalizado.

17 Este dirigente era miembro de la Agrupación Nacional de Recuperación Gremial de papeleros y de la Asamblea Gremial Argentina (AGA). Esta última estaba conformada por dirigentes peronistas que se habían enfrentado a la conducción de sus gremios durante la normalización. La integraban Alari (papeleros, enemistado con Donaires), Báez (seguro, enemistado con Valle) y Masó (plástico, adversario de Triaca). Posteriormente formará parte de la Mesa de Enlace Gremial junto con el Encuentro Nacional de los Trabajadores (ENTRA) en el que militaban Guillán (telefónico) y otros representantes de sectores del peronismo y la izquierda como Peralta (periodistas), Piccinini (metalúrgicos) y Cortés (canillitas); el Plenario Sindical Nacional (PSN) encabezado por Framini; y el MNRS (ver Beliz, 1988).

secretario general de la Federación del Papel "gracias a la legislación dictada por la dictadura militar". Sostenía que estaba entre los culpables de la derrota electoral del PJ y, además, que "electo diputado nacional" aquel "ya no es más secretario general de la federación por aplicación del Art. 73 de sus estatutos". Donaires llamó a un paro por aumento salarial retroactivo y Alari lo boicoteó.

En diciembre, el Sindicato Grafico Argentino denuncia que hicieron todos los trámites para normalizarse, pero fueron denegados por el Ministerio de Trabajo, postergándolos para más adelante¹⁸. El Ministerio también suspendió las elecciones del Sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos de Buenos Aires por denuncias de la agrupación peronista Lista Violeta; y el 10 puso fin a la intervención militar de la UOCRA nombrando un delegado normalizador¹⁹. Los gremialistas, sin embargo rechazaron al delegado y lo denunciaron como la última jugada de la dictadura.

Ya para el 14 de diciembre, desde el Ministerio de Trabajo encabezado ahora por Mucci, se resolvió la disolución de la comisión transitoria de la UF y de la junta electoral del sindicato de telepostales de Buenos Aires. En el caso de UF, los miembros que habían renunciado a la comisión para presentarse a elecciones querían reincorporarse cuando se suspendieron, y el Ministerio de Trabajo no estaba dispuesto. Mucci también suspendió los comicios en papeleros sin explicación de por medio. Era el gremio en el que se enfrentaban Donaires y Alari. La junta electoral del gremio caracterizó la medida de "insólita".

2. La ley de normalización y la unidad sindical

2. a. La presentación del proyecto

El 17 diciembre se presentó el proyecto de normalización sindical. Al mismo tiempo, el diputado sindical (mecánico) Cardozo elevaba a la cámara baja un proyecto de resolución para que se investigue el destino de los fondos sindicales durante la intervención militar de los gremios.

El día en que se presentó el proyecto la CGT-RA mantuvo silencio y pautó una reunión para fijar su posición. La CGT-Azopardo manifestó su oposición inmediatamente. Triaca dijo que las elecciones de abajo hacia arriba deberían darse en el marco de los estatutos sindicales actuales²⁰. Baldassani, en tanto, dijo que era incompatible que el parlamento encuadre una ley democrática en una dictada por una dictadura. Propuso derogar la ley 22105 y legislar en el marco de la 20615.

Mientras tanto, sindicalistas de izquierda y peronistas combativos dieron un apoyo condicionado al proyecto de ley, pensando que con ciertos cambios podía ser la base de la garantía

¹⁸ Ongaro, desde el exilio, ratificó que volvería al país después del 10 de diciembre, y denunció al "corporativismo" de las direcciones sindicales contra el proceso de democratización, acusándolos de ser los que desencadenaron el golpe de 1966. Esta postura del ex secretario general de la CGT de los Argentinos es curiosa en un punto: Mucci había sido su opositor en el gremio de los trabajadores gráficos, y desde allí había llegado a secretario general del MNRS.

¹⁹ Fue el último interventor militar, la organización estuvo intervenida desde marzo de 1976.

²⁰ Las organizaciones sindicales "no han perdido ninguna guerra de Malvinas" como para que se las encare con un reordenamiento, sostuvo (*Clarín*, 19/12/83).

para la democratización. Propiciaron un encuentro nacional de trabajadores (futuro ENTRA) para debatir los problemas de la realidad nacional²¹. También le acercaron un documento al gobierno donde sostenían que la ley de reordenamiento puede ser autónoma de la 22105. La Asamblea Gremial Argentina también se manifestó a favor, pero puntualizó que el proyecto era perfectible y criticó el acuerdo de unidad "de cúpulas" que estaban negociando las centrales sindicales por "carecer de legitimidad las representaciones invocadas"²².

Algunos dirigentes sindicales peronistas consultados por los medios dijeron que el proyecto conmovía toda la estructura sindical del país y que ese reordenamiento que planteaba el gobierno debería haberlo hecho primero en "la patria financiera y en la economía general del país".

Lo primero que intentaría el gobierno sería la remoción de las conducciones que no consideraba representativas (a pedido del MNRS). Solo seguirían en funciones los dirigentes que fueron elegidos y no fueron impugnados (290 sindicatos), pero no aclaraba el proyecto hasta cuando pueden impugnarse, lo que haría que queden muy pocos. Como las comisiones transitorias quedaban expuestas a reemplazos digitados por el Ministerio de Trabajo, Mucci ya apuntaba a UF.

Al día siguiente, la CGT-RA se declara en estado de alerta y movilización, y dice que el proyecto es absurdo y está dirigido a debilitar a las organizaciones gremiales²³. Los diputados radicales dijeron que iban a defender el proyecto porque "es el que votó la mayoría" en las últimas elecciones, aunque se podían negociar los artículos (antigüedad para ser candidato, porcentaje de la minoría, etc.). El movimiento de trabajadores radicales (MTR) expresó su apoyo incondicional al proyecto de ley y habló de "dictadura sindical".

21 Firmaban Guillan (Telefónicos) Piccinini (Metalúrgicos) Peralta (prensa) Gorini (judiciales) Nagera (mecánicos de Córdoba) Brunel (Gráfico) Rotuno (Luz y Fuerza) Egea (carne). Compartían la necesidad de la democratización sindical pero ésta no tenía que limitarse a la renovación de las conducciones del movimiento obrero sino prolongarse hasta la plena participación. (*Clarín*, 21/12/83)

22 Entre otros, adhieren a la declaración Blas Alari (papeleros), José Báez (seguros), José Cerqueti (bancarios), Adolfo Medina (ferroviarios) y Lindolfo Ferrari (textiles) (*Clarín*, 18/1/84).

23 Distintos líderes gremiales vertieron su opinión en los medios: Ubaldini declaró "los radicales no cumplieron con las reglas de juego que habían prometido" porque no se tuvo en cuenta para concertar la ley a los gremios, fue un "monólogo a la mejor manera de la dictadura militar", "no aceptamos la democracia con salarios de hambre y con cesantes". Rodríguez (SMATA) dijo que por esta ley todo el movimiento obrero está intervenido y que pareciera que los estatutos sindicales "usados por más de 50 años hubieran sido hechos por marcianos". Triaca e Ibáñez criticaron el proyecto de ley en el programa de Neustadt, "yo quiero preservar al presidente, lo necesito 6 años" (Triaca) "me preocupa que la institución presidencial irrumpa en escena de esta manera" (Ibáñez). Taccone (Luz y Fuerza) dijo que el proyecto tiene objetivos ideológicos. Detrás del pluralismo lo que se busca es que el movimiento obrero sea socialdemócrata. Sobre ello, dijo que era un modelo en crisis en Europa y que busca la penetración ideológica de los trabajadores. Cavalieri, en tanto, dijo que si el peronismo es mayoría en los sindicatos, corresponde el diálogo con él y no la confrontación directa.

Mucci, en tanto, contestó que la ley favorece a la mayoría de los trabajadores, y que se va a negociar y discutir todo lo que sea posible. Criticó a Triaca diciéndole que usó los medios durante 5 años para convertirse en vedette, que van a dejar de "correr con el caballo del comisario", que la dictadura expulsó a los trabajadores más combativos de las fábricas y por eso no ponen trabas de antigüedad para presentarse, y que los sindicalistas son jueces y parte. Triaca le contestó que el ministro de trabajo quiere convertirse en el líder de una línea gremial dentro del movimiento obrero y que eso es "correr con el caballo del comisario". Diputados peronistas le recordaron que ya hubo otro ministro que trató de formar los "32 gremios democráticos" y fracasó. (*Clarín*, 20, 21 y 22/12/83).

El debate en la cámara y las comisiones era por demás áspero. El bloque de diputados del Partido Intransigente (PI) apoyó el proyecto. Desde los medios, Mucci acusó a la oposición de desestabilizar al gobierno y expresó su confianza en "el sentido común y la sensatez" de los trabajadores para que la oposición al proyecto no derive en medidas de fuerza, y que la huelga "era un derecho de los trabajadores, no de los dirigentes" (*Clarín*, 22/12/83). Así mismo, el ministro dijo que reconocía a las dos CGT, pero que también reconocía "como lo hacen algunos organismos internacionales" al MNRS. Al mismo tiempo, Alfonsín se reunió con la lista de oposición del SUPE y provocó que la conducción del gremio lo critique por inmiscuirse en la política interna (en SUPE estaba Ibáñez diputado de extracción sindical, miembro de las 62 organizaciones y uno de los acusados de formar parte del pacto militar-sindical).

El convenio 87 de libertad sindical la OIT²⁴ fue constantemente traído a colación por los que criticaban el proyecto. Miguel dijo que las minorías ya se expresaban en los congresos de delegados. Mientras tanto, las dos CGT vuelven a reunirse para fijar una posición conjunta frente a las leyes de reordenamiento sindical y obras sociales, y empiezan a discutir una fórmula que contemple cuánto aportarían las organizaciones de las centrales en la conducción de la CGT unificada. Igualmente, la próxima reunión por la unidad será en 1984, y continuarán los problemas para consumarla²⁵. Pronto los gremios darían a conocer su anteproyecto de reorganización sindical.

Gremios y gobierno parecían influenciados por prejuicios provenientes de un proceso anterior. El gobierno temía que vuelva el ciclo de huelgas y ocupaciones de fábricas con rehenes producidas entre 1963 y 1966²⁶. Del lado gremial, flotaba el fantasma de Illía y el decreto 969/66.

Las dos centrales reclamaron que se llame a elecciones en los gremios en el plazo de 4 meses sin injerencia del estado ni de los empleadores, así como el llamado a paritarias bajo la ley 14250 y un mecanismo de actualización salarial acorde al movimiento inflacionario.

Con el inicio de 1984, la iglesia se pronunció a favor de que los trabajadores decidan ellos mismos las características de las estructuras sindicales, incluyendo la opción por el sindicato único por rama, sin imposiciones privadas u oficiales. Señaló también que el estado debía garantizar "el libre juego de la democracia", subrayando que no correspondía que las asociaciones profesionales actuaran en política.

24 Sintéticamente, postula que los afiliados tienen el derecho a darse sus propios estatutos.

25 Uno de los más importantes era que, si bien la CGT-RA estaba dispuesta a que cada organización elija su representante a la nueva central unificada, no lo estaba para que haya otro representante de los mecánicos que no sea Rodríguez.

26 Sobre el tema, ver Schneider (2006). Hay que mencionar que en este mes de diciembre la UOM gana aumentos de más del 50% en muchos lugares de trabajo, amenazando con ocupar fábricas y tomar rehenes. Si bien la metodología pareciera ser la misma (aunque efectivamente no se concreta), pertenecen a dos ciclos históricos completamente distintos.

El radicalismo esperaba que hacia el 20 de enero empezara a tratarse la ley sindical, y la defendía en bloque. Mientras tanto, solo dos proyectos habían sido sancionados en diputados (aguinaldo y derogación de la auto amnistía militar). Los diputados radicales se negaban a esperar hasta que haya elecciones en los gremios para sacar la ley sindical como querían los peronistas, y eran optimistas porque (suponían) se llegarían a muchos acuerdos previos en la comisión respectiva. Declaraban, al mismo tiempo, que los gremios endurecían posiciones para llegar más fuertes al tratamiento de las leyes de obras sociales y organizaciones profesionales que se tratarían después.

2. b.La Unidad

Para principios de 1984, la CGT-RA hizo una propuesta para unificar las centrales. La nueva conducción sería proclamada en un plenario nacional. En el caso de los sindicatos grandes intervenidos, los afiliados deberían elegir un representante y entonces cada central elegía los suyos hasta llegar a 14 por central. Los 46 gremios de la CGT-RA habían resuelto apurar la unidad ante el panorama político para no perder terreno. Pidieron también la unidad de las 62 organizaciones, que deberían ser reestructuradas.

Para esta altura, algunas seccionales de la CGT del interior ya estaban unificadas (como en Chaco) y los dirigentes de las centrales nacionales le restaban importancia al MNRS y los otros nucleamientos que el gobierno mantenía como interlocutores válidos²⁷.

El 10 de enero la unidad de las CGT fue anunciada formalmente por Ubaldini y Triaca, aunque no estuvo presente el grupo de "los 20". La nueva conducción sería proclamada durante un plenario nacional el 25 de enero y se envió un telegrama al administrador de la CGT solicitando la devolución de la sede para el plenario.

Para Luján la declaración de unidad fue "un golpe bajo", y dijo que la CGT unificada "será un grupo más". Afirmó tajantemente que al grupo de "los 20" no los invitó nadie y que en las comisiones transitorias había representantes de las dos CGT que se disputaban las conducciones, y eso impedía la unidad. "Los 20" volvían a ser impedimento de unidad como en la experiencia de la CUTA durante el proceso²⁸. Triaca, mientras tanto, rechazaba todas las críticas porque el acuerdo se ajustó a lo que Azopardo había establecido para la unidad: una conducción colegiada provisoria.

Los dirigentes de la CNT trataron arreglar con "los 20" y Etchezar, que no quería una unificación sindical en base a la oposición al proyecto del gobierno, criticó a Triaca por querer representar a todo el sector, aunque también manifestó algunas críticas solapadas al proyecto²⁹. "Los

²⁷ Triaca dijo que "el movimiento obrero no se puede improvisar ni surgir de los comités", el MNRS había sido fundado en 1982. (Clarín, 08/01/84).

²⁸ Ver Abós (1984), páginas 60-62.

²⁹ Por el "excesivo poder que otorga al Ministerio de Trabajo" en la intervención a los gremios, si bien estaban "totalmente de acuerdo" con los puntos que contemplaban elecciones "de abajo hacia arriba", la representación pluralista en las comisiones directivas, y la intervención de la Justicia Electoral en los comicios internos de los gremios (Clarín,

20" pidieron postergar el plenario para dilucidar posiciones pero la comisión de unidad sindical lo ratificó y la UTA, uno de los pocos gremios grandes no alineados con ninguna CGT, decidió participar.

La ruptura de la CGT-Azopardo estaba a la orden del día mientras "los 20" siguieran desconociendo el acuerdo por la unidad, y el problema se agudizó cuando empezaron a hacer gestiones ante las autoridades nacionales en representación de toda la central. El gobierno, ni lerdo ni perezoso, les otorgó audiencias con distintos ministros.

Un día antes del plenario, el ministro de trabajo rechaza dar el local a las dos CGT diciendo que sólo se lo va a devolver a las autoridades que surjan del proceso de normalización. Finalmente SMATA no forma parte del plenario por sus disputas internas, pero sí la UOCRA, que resolvió sus representantes a último momento. Se acuerdan 2 secretarios generales por cada central, y la CGT unificada emite un documento muy crítico de las políticas económicas y sindicales del gobierno. La mayoría de la dirección sindical peronista se unificaba por afuera del verticalismo de Miguel, que había ganado la interna para comandar el proceso eleccionario de octubre, pero después de la derrota no formaba parte relevante de las tratativas.

Mientras tanto, dirigentes gremiales en su mayoría pertenecientes al peronismo de izquierda, convocaron a un plenario sindical nacional en Avellaneda para el 23 de enero, a fin de fijar posición sobre el proceso de normalización sindical y "la situación que vive la clase trabajadora". El plenario del ENTRA designó una comisión de enlace para fomentar un frente para la reorganización democrática del movimiento obrero con la Asamblea Gremial Argentina. Ambos nucleamientos mandaron telegramas a Mucci y Germán López oponiéndose al pedido de las CGT-RA y Azopardo de que les devolvieran el edificio de la CGT. También tienen reuniones con el MNRS y el PNS de Framini, que había manifestado su apoyo al proyecto y venía teniendo reuniones con el gobierno.

En la cámara de diputados, radicales y peronistas no se pudieron poner de acuerdo para empezar a estudiar la ley en la comisión de legislación laboral, y pusieron en funciones una comisión "paraparlamentaria" que buscaría compatibilizar los criterios divergentes y evitar cortocircuitos. La comisión de enlace parlamentario inter-CGT seguía teniendo reuniones con las distintas bancadas y había mucha expectativa por la que se efectuara con los representantes del MPN.

Cuando se conocieron las pautas para la nueva ley de obras sociales que presentaría el gobierno, las negociaciones en el parlamento se hicieron más difíciles por la presión sindical. Cada vez era más difícil llegar a un acuerdo en la comisión parlamentaria y el radicalismo especulaba con que el proyecto saldría al recinto con 2 despachos, uno por mayoría, y otro por la minoría. El punto central de la diferencia era el papel de los administradores, que el peronismo calificaba de meros

interventores. Si bien el radicalismo negocia que las intervenciones sean hechas por la justicia en el caso de que hubiera impugnaciones por alguno de los sectores, el peronismo responde que “las impugnaciones se fabrican”.

2. c. Se calienta la puja interna en los gremios

Mientras el proceso hacia la unificación se desarrollaba, muchos gremios seguían con problemas internos.

En una solicitada del 28 de diciembre, la comisión transitoria de la UF criticó la política económica “seguidista” del gobierno y la mantención la suspensión de sus elecciones decidida por la dictadura militar y sostenida por los radicales. Al mismo tiempo, la que fue la conducción de la UF hasta 1976 y otras agrupaciones opositoras le pidieron a Mucci la disolución de la actual comisión transitoria y que se nombre un delegado administrador. Estas listas ya habían conseguido por medio de la justicia que las elecciones sean suspendidas. Sostenían la no representatividad de la comisión, conducida por la lista verde (de las 62 organizaciones). El Ministerio de Trabajo dispuso el 12 de enero la disolución de la comisión transitoria, y designó en su lugar un delegado administrador. Era una de las comisiones transitorias que Alfonsín denunciaba como parte del pacto militar-sindical. El delegado normalizador comunicó que las autoridades de las seccionales que se encontraban en ese momento en sus cargos continuarían en sus funciones.

En tanto, 5 agrupaciones de Luz y Fuerza Capital Federal³⁰ solicitaron que no se suspendan las elecciones del gremio. El estatuto del sindicato era anterior a los redactados por la dictadura, por lo que no habría por qué suspenderlas. La lista S impugnó candidaturas de varias listas porque algunos eran miembros de la comisión normalizadora y no renunciaron a tiempo, como Lescano. La lista T quería suspender las elecciones hasta la aprobación de la ley sindical. Las tres Azul y Blanca (fraccionamientos de la conducción tradicional del gremio) querían que las elecciones se hagan si o si, y hasta admitían el control del ministerio y la Junta Electoral si así lo deciden. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo suspendió las elecciones por las denuncias de la lista T sobre el plan de normalización aprobado por la anterior cartera laboral (había impugnado las elecciones porque no se habían adecuado los estatutos a la ley 22105). También denunciaron vicios en el proceso electoral.

Esto desencadenó un paro y movilización y 5 de las 7 listas sacaron un documento conjunto de repudio³¹. La comisión normalizadora sostuvo que la impugnación fue realizada por el MNRS

³⁰ Se presentaban 7 listas para esta seccional que tenía la cláusula de representación de las minorías en un 30%. A saber: La Azul y Blanca Lealtad que responde a la CGT.-RA; la Azul y Blanca "Oscar Smith, presente", con Oscar Lescano a la cabeza, azopardista; la Azul y Blanca, inclinada hacia la CGT.-RA, aunque sin representación en esa central obrera; la lista Q, de orientación comunista; la lista T, cercana a la UCR; la lista U, del Movimiento Al Socialismo; y la lista S, que no aparecía con una clara identificación política.

³¹ Pero dentro del campo de las agrupaciones peronistas del gremio seguían las disputas. Una asamblea convocada por la Agrupación Azul y Blanca, que respondía a la conducción nacional de Taccone, reclamó al gobierno la formación de una nueva comisión transitoria que integren todas las listas presentadas a las frustradas elecciones, pero criticaron a

afín al gobierno y al que pertenece el propio Mucci, por lo que eran juez y parte. En la movilización al Ministerio estuvieron presentes 1500 trabajadores. El gremio denunciaba que para suspender las elecciones se usaba la ley 22105 del gobierno militar.

Por otro lado, la comisión directiva del sindicato único de la publicidad dejó sin efecto el llamado a elecciones que había hecho la comisión normalizadora para el 29 de diciembre, por irregularidades en la convocatoria³².

Las 64 seccionales de la UOCRA, en tanto, pidieron a Mucci la normalización total del gremio y elecciones de acuerdo a los estatutos vigentes antes de 1976. Protestaron porque continuaba a cargo el delegado normalizador nombrado por la dictadura. Los dirigentes de las seccionales estaban enfrentados al último secretario general y entonces diputado justicialista Papagno. El gobierno propició una comisión transitoria para normalizar y el ministerio reemplazó al delegado normalizador por un administrador como primer paso. El nuevo administrador se encargaría de conversar con todos los sectores y, si éstos se ponían de acuerdo, propiciaría la formación de una comisión sindical transitoria para que normalice mediante elecciones. El gremio en ese momento tenía cerca de 350000 afiliados siendo de los más grandes.

A diferencia de lo que pasó en el caso de UF, el 19 de enero el ministro de trabajo le comunicó a Papagno que dispuso el reemplazo de todos los dirigentes de la organización que fueron designados al frente de seccionales por el último gobierno militar. 41 de las 64 seccionales, incluida la de Capital Federal, tenían funcionarios designados por los militares³³.

En bancarios y gastronómicos, dos grandes gremios, las distintas listas y la intervención anterior se sacaban chispas por el vaciamiento de los fondos de sendas obras sociales. Dentro de la Asociación Bancaria una lista interna, el Frente Nacional de Agrupaciones Bancarias, apoyaba el proyecto del Ministerio de Trabajo y se oponía a Zanola. En gastronómicos el delegado normalizador de la obra social presentó una querrela por administración fraudulenta a un grupo de ex dirigentes sindicales de la obra social. La conducción del gremio, en tanto, le responde acusándolo de haber vaciado el gremio y declara estado de alerta y movilización. El 21 de enero se anuncia la asunción del nuevo delegado normalizador y la destitución del anterior, que evita la huelga de los gastronómicos de Mar del Plata en medio de la temporada de verano.

Lescano diciendo que “hay que tener cuidado con los compañeros que quieren llegar de cualquier manera”.

32 La aplicación de reformas en el estatuto sin difusión previa, la inexistencia de padrones sindicales en la sede, y porque el proceso sería “extemporáneo” dado que se estaba desarrollando un proyecto de normalización sindical en el congreso.

33 La seccional Capital estaba a cargo del delegado normalizador Juan Alejo Farías, rival de Papagno. La medida afectaría, asimismo, a los dirigentes de la Mesa Nacional de Conducción de la UOCRA, Gaziano (Santa Fe) y Raúl Maglione (Mar del Plata), que militaban en la CGT-Azopardo.

La CGT-RA declaró su apoyo a la movilización de Luz y Fuerza y de cualquier otra organización que se movilice contra el gobierno si no dejan organizar las elecciones para normalizarse. En una reunión con Pedraza, la central ya se mostraba alarmada por la posibilidad de la intervención de UF, lo que se concretó más tarde, y no se descartaban medidas similares para SMATA o SUPE (todos grandes sindicatos). La denuncia era fuerte: el Ministerio de Trabajo ayuda a agrupaciones nuevas sin trayectoria en los gremios.

La denuncia, más allá de las desmentidas de Mucci, se alimentaba de las actividades de muchos funcionarios. Por ejemplo Subrin, el vicepresidente del bloque radical de diputados, declaró que el radicalismo quería ganar un espacio sindical (lo que se contradice con el discurso de no existencia de actividades políticas en los sindicatos) después de una reunión con el Frente de Obreros Democráticos de la Construcción (*Clarín*, 14/1/84). El mismo Alfonsín tuvo una entrevista con José Báez, integrante por el gremio del Seguro de AGA. Báez declaró que durante la entrevista con Alfonsín le indicó que su grupo pretende que en la ley sindical se modifique la representación de las minorías para que estén solo en las asambleas, que se respete una antigüedad mínima para ser candidato y que sólo voten los afiliados.

3. De la victoria parcial a la derrota radical

3. a. Los jugadores hacen sus apuestas

A fines de enero se rompió la negociación entre UCR y PJ en el parlamento. La discusión se cerraba en un punto: los radicales rechazaban la propuesta peronista sobre el papel de los administradores y pensaban sacar un despacho de mayoría que responda íntegramente al proyecto. El gobierno amenazaba: si no sale la ley “sucederá lo peor, es decir, la vigencia de la ley 22.105, que es la ley de la dictadura” (*Clarín*, 27/1/84).

El bloque UCR respondería recién el 31 a la propuesta del PJ para tratar de forzar a una última instancia de acuerdo mínimo que evite asperezas en el recinto, aunque se era poco optimista. La contrapropuesta radical sería reemplazar al administrador por un “delegado” del Ministerio de Trabajo, acompañado por una comisión compuesta por un representante de cada una de las listas reconocidas, mientras que el sindicalismo proponía que la junta sea elegida por asamblea del gremio y tenga los atributos de la conducción, y el delegado el contralor y la disposición de los bienes.

Jaroslavsky y Ubaldini intentaban que las negociaciones no se caigan, pero las mismas entraron en una vía muerta a partir de las intervenciones a las federaciones de papeleros, petroleros y telefónicos. Unos días después hubo un acercamiento entre las dos bancadas y parecía que se llegaba a un acuerdo³⁴. Sin embargo, el ánimo de las bancadas cambiaba día a día, y el 4 de febrero en una

³⁴ Básicamente, el acuerdo sería el siguiente: en los gremios intervenidos se designaría un delegado con las facultades del cuerpo directivo, que tendría que convocar en 10 días a todas las listas, las que en 3 días propondrían 3 candidatos por cada una. Vencido el plazo, el delegado elegiría de entre los candidatos un representante de cada lista, quienes pasarían a

sesión convulsionada los diputados casi se toman a los golpes. Para el 10, día en que se votaba la ley en el recinto, tanto radicales como peronistas habían planteado sendas movilizaciones al congreso. Serrano, de Luz y Fuerza, aseguró que de aprobarse la ley tal como estaba, quedarían 800 organizaciones sindicales con un delegado del Ministerio de Trabajo, que para el sindicalismo era lo mismo que una intervención. La publicación en los medios de las pautas para la ley de obras sociales tampoco ayudaba a recomponer las negociaciones.

El día de la sesión en diputados, el radicalismo dio muestras de un supuesto “tratado de tolerancia” para que la sesión pudiera realizarse, seguro de que podría imponer la mayoría. Pero cuando Iglesias y Ubaldini entraron al recinto se armó un tumulto tal que se tuvo que suspender la sesión hasta la noche. Las trifulcas se repitieron en la sesión nocturna, pero igualmente el radicalismo logró aprobar la ley con algunas reformas, sobresaliendo la junta fiscalizadora formada por todas las listas y el delegado normalizador del ministerio con las facultades de la conducción gremial. La cámara entraba en receso unos días después, terminando las sesiones extraordinarias sin terminar de tratar todos los proyectos que ingresó el ejecutivo.

Aunque durante las elecciones de octubre el MPN había apoyado al radicalismo, Elías Sapag declaró que mientras no se hicieran modificaciones al proyecto sobre la injerencia del estado y sobre la representación de las minorías no votaría la propuesta, y que la decisión de intervenir federaciones no ayudaba a la negociación. El MPN, conocedor de la importancia de sus votos en la cámara de senadores, había querido pararse desde un principio como árbitro entre los partidos principales, y se acercaba a la posición peronista sin llegar al rechazo absoluto del proyecto³⁵. La apuesta pasaba por disminuir las atribuciones del delegado ministerial y acrecentar las de la junta fiscalizadora o reemplazarlo por la justicia electoral.

El presidente, para ese entonces, pensaba en reflotar la multipartidaria como una forma de concertación entre los partidos, y así llegar a acuerdos antes de que los proyectos oficiales llegaran a las cámaras. En el senado, el radicalismo buscaba reunirse con todos los partidos provinciales antes de que el despacho de diputados empezara a tratarse, y las reuniones informales con los senadores peronistas eran normales. El vicepresidente Martínez, el senador justicialista Britos, Ubaldini y otros personajes políticos mantenían negociaciones diariamente.

Varias veces representantes peronistas sostuvieron que era improbable el rechazo liso y llano del proyecto, y que se aprobaría por mayoría absoluta si el oficialismo cedía la reformulación del artículo 8º sobre los delegados ministeriales, reemplazándolos por un veedor. Pero cerca de fines de febrero los representantes de la comisión de la CGT solicitaron la modificación de 22 de los 44

integrar una junta gremial fiscalizadora con función de controlar la actividad administrativa del delegado.

³⁵ El sapaguismo jugaba con la idea de reconstruir el fragmentado PJ bajo la figura del gobernador de Neuquén, sueño que se vio incentivado por la invitación al MPN por parte del justicialismo para ser parte del consejo federal del partido.

artículos del proyecto (agregaban, entre otras, la modificación de la representación de las minorías según si el gremio decidía modificar sus propios estatutos), mientras los radicales estaban dispuestos a hacerlo solo con los 4 atinentes al delegado del Ministerio de Trabajo.

El radicalismo volvió a amenazar con la aplicación de la ley 22105 si no se aprobaba su proyecto. El bloque del justicialismo inmediatamente apoyó la solicitud de la comisión sindical aunque declaró que era optimista en cuanto a llegar a un acuerdo. Las declaraciones de los distintos actores parlamentarios sobre la resolución distaban de ser homogéneas. Los senadores de partidos provinciales formaron el “grupo de los 6” (que presentó un proyecto rechazado por radicales y peronistas) para negociar en conjunto, pero el PJ solo necesitaba 2 votos: con el MPN era suficiente.

Sin embargo, el triunfo en octubre, la aprobación del proyecto en la cámara de diputados y el hecho de haber movilizado el cuádruple de gente que el sindicalismo en la marcha de apoyo, envalentonaban al gobierno. El 14 de marzo se llevaron una gran desilusión cuando perdieron la votación en el senado por 24 votos contra 22.

A pesar de que todas las crónicas y buena parte de la historiografía sostienen que el radicalismo podría haber bajado algunas pretensiones para no sufrir tamaña derrota con sólo 3 meses de gobierno, la confianza en el diagnóstico que tenía sobre la nueva situación política, en la supuesta falta de representación de la central unificada, y en el sostenimiento de la posición equidistante del MPN frente los dos partidos mayoritarios nublaron su capacidad de reacción. Así mismo, de haber modificado sustancialmente (lo necesario para que el MPN apruebe el proyecto) los artículos referidos a la intervención del ministerio y de la representación de las minorías, no se hubiera garantizado quitarle el control del proceso de normalización a la dirección sindical peronista, hubiera sido un duro golpe para el sector interno que conformaban López y Mucci (entre otros miembros del gobierno), y se habría impulsado una mejora relativa en la correlación de fuerzas para el sindicalismo, como finalmente ocurrió cuando el proyecto fue derrotado.

3. b. La burocracia revitalizada

Dentro de la interna gremial las cosas se venían desarrollando de manera bastante más clara o, mejor dicho, más pragmática. Sin embargo, desde el momento en que la central se unificó, Luján la minimizó. Sería “solo un grupo de dirigentes que se unieron en una nueva estrategia”. Ubaldini, sin embargo, dijo que tenían los brazos abiertos para que “los 20” se sumen a la CGT.

La CGT unificada se reunió a poco de formarse para distribuir cargos (secretarías) y acordar programas de acción, pero no se llegaba a un acuerdo por el segundo secretario general que pondría la CGT-RA además de Ubaldini. Recién un día después elijarían a Osvaldo Borda (caucho). Baldassini, en tanto, exhorta públicamente a “los 20” a sumarse a la CGT reunificada, ofreciendo renunciar a su cargo de secretario general de la nueva CGT para que lo ocupe dicho nucleamiento.

En un comunicado, la CGT llamó a todos sus cuadros al estado de alerta y movilización en repudio a la bancada radical que iba a ingresar el proyecto de ley a la cámara baja, y organizó la marcha al congreso para el 10 de febrero sólo con estos cuadros. Igualmente, algunos sectores de la central preferían movilizar recién cuando se tratase en el senado, porque no había posibilidades de ganar la votación en diputados. Mientras por un lado el gobierno ofrecía una reunión con la CGT si se levantaba la medida, por otro declaraba su preocupación por “un rebrote de violencia”.

El día de la marcha diez mil personas concurrieron, y desde la unidad de la central el partido justicialista (conducido aún por Miguel) se acopló a la estrategia del sindicalismo. Ubaldini irá ganando mayor notoriedad que el resto de los secretarios, haciendo constantes declaraciones en contra de la política económica del gobierno.

El 23 de febrero el presidente se reunió por separado con los representantes de la CGT, “los 20” y la Mesa de Enlace. En el caso de la CGT, la reunión se centró (a pesar de las expectativas) en la participación del movimiento obrero en las decisiones políticas a través del proyecto de “concertación”, aunque también se trataron las reivindicaciones salariales, la ley de normalización y la de obras sociales. Triaca, al día siguiente, sostuvo que lo óptimo era volver a las convenciones colectivas de trabajo. La CGT estaba convencida que con las condiciones económicas imperantes, un marco como el de la concertación planteada no les comportaría ninguna ventaja.

En cambio, con los otros nucleamientos el tema central fue la ley de normalización. Alfonsín declaró que habría “imparcialidad”. El presidente le comentó a la Mesa de Enlace que querían mejorar el salario real de los trabajadores pero los bancos estarían haciendo presión para que la inflación licúe sus deudas, mientras que los representantes de éste nucleamiento le recordaron que con la ley de contrato de trabajo de la dictadura las empresas estaban despidiendo activistas sindicales opositores a la burocracia, y que había que reformarla. “Los 20” no hicieron grandes definiciones sobre la ley sindical, pero sí le señalaron al presidente que a partir de la normalización no se debía buscar la separación de las obras sociales de los sindicatos.

En los primeros días de marzo, la CGT convocó a un plenario de secretarios generales y delegaciones regionales para tratar las eventuales movilizaciones. El discurso del plenario endureció mucho las posiciones: Ubaldini acusó al presidente de contestar con expresiones de deseos y mentiras a los reclamos de los trabajadores y de estar “filosofando en vez de gobernar”. Triaca afirmó que “el gobierno de Alfonsín no es nuestro gobierno, que lo cuiden los cajetillas de Franja Morada”, y que los grandes movimientos populares “no se generan en probeta, se hacen con genitales” (*Clarín*, 8/3/84). Las declaraciones frustrarían la primera reunión por la concertación.

El plenario decidió poner en marcha un plan de acción que podría llegar al paro general, aunque posteriormente Triaca y Ubaldini lo desestimaron y sólo se confirmó una marcha al

ministerio de trabajo para pedir por la vuelta de las paritarias. Sí se resolvió ejercer plenamente la oposición ante el Gobierno³⁶.

El presidente había declarado que era imposible aplicar la ley de convenciones colectivas de trabajo hasta junio, hasta tanto no se hayan normalizado las entidades sindicales. La CGT decía que había tres problemas que deben discutirse: la evolución industrial; la participación ad hoc con la misión de asesorar al gobierno en materia de precios y salarios; y el mecanismo para modernizar los convenios colectivos de trabajo. “Los 20”, por el contrario, recibieron con “beneplácito” la iniciativa oficial de integrar mecanismos de concertación tripartita.

Por el lado del sindicalismo afín al gobierno, a fines de enero AGA, ENTRA y el MNRS, habían formado una comisión de enlace y acordaron llevar al Parlamento sugerencias modificatorias y ampliatorias. Según ellos, luchaban por una CGT única, democrática y pluralista, y por un sindicato único por industria como condición necesaria para las reivindicaciones obreras. Repudiaban, al mismo tiempo, las declaraciones del plenario de reunificación de la CGT porque “lesionan la dignidad de la Nación” al atacar al gobierno elegido por el 52% de los votos.

Según Guillán, el gobierno podría haber eliminado la 22105, haciendo caducar las conducciones y legitimando la intervención de los gremios, pero eso lo hubiera enfrentado a los trabajadores. Según el dirigente, para asegurar la normalización democrática era necesario que el reordenamiento se base el proyecto oficial pero con sugerencias de todos los sectores gremiales.

A principios de febrero ya estaba formada la Mesa de Enlace Gremial, y algunos de sus dirigentes se quejaron ante Mucci porque no se ingresaron las modificaciones que pidieron al proyecto, y por la marcha en apoyo al proyecto. Dentro del nuevo agrupamiento, el ENTRA ensayaba reuniones con la CGT unificada para discutir la unidad del movimiento obrero, cosa imposible si se mantenían las disputas dentro de los sindicatos entre AGA y la CGT. Cuando la CGT unificada llamó a marchar el 10 al congreso, la Mesa de Enlace Gremial no adhirió, pero el ENTRA tampoco adhirió a la marcha en apoyo que organizó la Mesa ni firmó la solicitada del 15 de febrero. El ENTRA se reunía individualmente con el vicepresidente de la comisión de trabajo en el senado, le acercaba una serie de sugerencias para reformar el proyecto y denunciaba que se despedían a obreros opositores a la conducción de la CGT.

Cuando se realizó la marcha en apoyo al proyecto organizada por el radicalismo y buena parte de la Mesa de Enlace, asistieron alrededor de 40000 personas. Una vez que se confirmó tal

³⁶ Igualmente, a la CGT le costaba conciliar un rumbo entre sus distintas vertientes: Cavaliere y Baldasini se oponían a la idea de elevar el nivel de enfrentamiento; Triaca apuraba la línea opositora al gobierno; Los 25 se sentían atacados por la política gremial oficialista, pero recomendaban prudencia y tranquilidad; Ubaldini se inclinaba por la recomposición de la relación; Miguel esperaba una entrevista con Alfonsín que serviría para la reconstrucción de la su situación interna en el partido justicialista (ver “La Búsqueda de las Alianzas Posibles”, nota de opinión de J. Morales Solá. *Clarín*, 11/3/84).

masividad, la marcha se trasladó desde el congreso hacia la casa de gobierno, y el presidente dio un discurso desde el balcón del primer piso del ala norte, en vez del correspondiente al del segundo piso donde habitualmente lo hacía Perón. Su consigna central fue “no es tiempo de enfrentamientos”.

Entonces, algunos de los gremios dirigidos por peronistas no asistieron a Plaza de Mayo y se retiraron de la marcha, no sin antes dejar pintadas contra la dirigencia sindical oficial y por la liberación de algunos ex dirigentes Montoneros (Obregón Cano, Firmenich). El sector peronista que se quedó, nucleado en la línea de Intransigencia y Movilización³⁷, cuando fue interpelado favorablemente por Alfonsín respondió con los dedos en “V” y pidieron por Obregón Cano, siendo acallados por los alfonsinistas.

El 9 de marzo, la Mesa de Enlace Gremial aceptó a la propuesta de concertación y emitió un documento en el que sostenían que no solamente les interesa asesorar, sino participar en la concertación en forma activa, además de que la crisis no era responsabilidad del Gobierno constitucional sino herencia de la dictadura.

El aumento del salario real, después de los aumentos de diciembre, enero y febrero, estaba apenas 3 puntos por arriba del alza del costo de vida de los mismos meses según cifras del INDEC, así que la situación salarial luego de la salida de la dictadura casi no se había modificado. En marzo, el aumento fue menor en 4 puntos al de febrero (7%). El mismo ministro Grinspun declaraba desde Roma: "Coincido con ellos (los gremialistas) en que no estamos en el punto que deseábamos respecto de los niveles de salario real, que cayó mucho en estos años y por el que luchamos juntos los dirigentes obreros y los de los partidos políticos. Los enemigos de la clase trabajadora no están entre la gente del Gobierno. Son otros" para luego agregar “las tres corporaciones que se formaron en la Argentina después de la segunda guerra mundial las identifico como la gremial-obrera, la militar y la pseudo financiera. Necesitamos dismantelar el Estado corporativo que se había apropiado del Estado. No corresponde a una estructura legal. Después del 45 se crearon sindicatos similares a los de los nazis y los fascistas. Las tres corporaciones durante todos estos años realizaban pactos entre sí. Ahora debe funcionar la democracia” (*Clarín*, 22/2/84).

3. c. La ofensiva del gobierno en los sindicatos: la política de intervención.

La tensión en el ámbito obrero era azuzada por el gobierno. El 29 de enero, la UOCRA amenazó con un paro si no se daba aumento salarial y se removía a todos los dirigentes confirmados por la dictadura, pero se suspendió cuando Mucci se comprometió a reunirse con Papagno.

³⁷ Framini, del PNS, era asesor del senador justicialista Saadi, y dirigente de ésta línea. Si bien este sector peronista asistió a la marcha, el senador saludó a Ubaldini en diputados. Declaraciones posteriores de la agrupación, firmadas por los secretarios de su mesa nacional Nilda Garré y Praxodos Molina, volvían a manifestar su apoyo al proyecto de ley pero siendo necesaria la derogación de la legislación sancionada por el gobierno militar.

El día siguiente disponen la intervención del SUPE por una denuncia de la lista Azul en reclamo de una integración proporcional de la comisión normalizadora³⁸ y la pronta convocatoria a elecciones internas. Diego Ibáñez, ex secretario general del SUPE y presidente del bloque de diputados justicialistas, dijo que no lo iban a permitir porque el gobierno seguía usando la ley de la dictadura, pero que igual no afectaría las negociaciones por la ley sindical, ya que no creía que estuviera dirigida contra él la intervención. Sin embargo, sostuvo que la misma “es política” y que es una muestra de que el gobierno quiere un sindicalismo obediente a los fines partidarios.

El 31 la CGT declara el estado de alerta y movilización por la intervención FOETRA y la federación del SUPE, y hace la denuncia ante la OIT. El gobierno inicia acciones judiciales contra los dirigentes de las comisiones transitorias destituidas de ambas federaciones porque se resisten a dejar entrar a los dos delegados del Ministerio de Trabajo a los respectivos edificios³⁹. También se interviene a la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel y, junto con la UF⁴⁰, ya son 4 las intervenciones a gremios de peso. El gobierno no usa la fuerza para irrumpir en las sedes y eso hace posible la resistencia.

El 3 de febrero, ante el repudio de la central obrera y los senadores peronistas, Mucci declara que no habrá más intervenciones, pero el SUPE extiende los paros. Un día después la justicia suspendió la intervención por “ilegal manifiesta”, y el resto de las federaciones intervenidas lo toman como referencia. El gobierno apeló la medida por “política” en vez de “técnica”, restándole sustento jurídico. Los mismos argumentos usaba Ibáñez para caracterizar la intervención, denunciando que se hacía por pedido de la Lista Azul. El 10 se conoció el rechazo legal a la intervención de telefónicos, a la que se sumaría la de FOETRA y de la obra social de los ferroviarios.

El SUPE declara que YPF incurre en irregularidades con los aportes patronales, y el Banco Nación Argentina y el de la Provincia de Buenos Aires les comunican a la federación de papeleros que sus fondos están bloqueados. Los telefónicos presentaron un recurso de amparo porque el bloqueo de fondos e inhibición de bienes caía también sobre los hoteles del gremio en plenas vacaciones. Luego se intervino la obra social de trabajadores del seguro. También empiezan a aparecer críticas a las intervenciones desde dentro del gobierno, como las del asesor presidencial y ex ministro peronista Ángel Federico Robledo.

38 La comisión tiene 13 miembros: 6 de CGT-RA, 6 de CGT-Azopardo, y uno de Lista Azul

39 En el caso de FOETRA, un plenario de 24 secretarios generales de todo el país decidió no entregar la sede central, y se organizan paros de 2 horas por turno (la intervención será declarada nula por la Cámara de Apelaciones el 22 de febrero).

40 Las seccionales ferroviarias impulsan por sí mismas paros en toda la provincia de Buenos Aires por cuestiones salariales, haciendo caso omiso de la intervención de la unión. Junín, ramales San Martín, Belgrano y Sarmiento se organizan por mejores salarios. Ocho seccionales de la Unión Ferroviaria del Roca se declararon en estado de alerta. Estas seccionales pertenecían a la lista verde (desplazada de la conducción al caducar la comisión transitoria).

En tanto, SMATA declara el estado de alerta y movilización en protesta por la desautorización de las elecciones convocadas por el gremio para febrero. El gremio realiza elecciones de delegados y comisiones internas, en rebeldía a la desautorización. Tiempo después, en marzo, el congreso extraordinario de la Confederación General de Empleados de Comercio resolvió pedir a las autoridades nacionales que si bien estaban a favor de la unidad del movimiento obrero a través de la reunificación de las ex CGT, hasta que no se concrete como tal no integrar la conducción.

A fines de febrero, Alari recibía un duro golpe al perder la seccional Ledesma de papeleros frente a la lista que apoyaba a Donaires. Si bien era una seccional media dentro de la federación, el candidato a la reelección era el secretario general de la CGT salteña y es superado por casi el doble de los votos. Alari declaró fraude, mientras Donaires señalaba que el resultado era una respuesta de los trabajadores por acercarse al gobierno que intervino la federación.

No está de más recordar un poco el marco del cuadro general del sindicalismo que estamos comentando: el ministerio interviene federaciones con conducciones que tienen los mandatos caducos o son parte de las comisiones transitorias que avaló la dictadura (para el caso, además, Ibáñez es el jefe de la bancada peronista de diputados y también forman parte del cuerpo Pepe de UF y Donaires de papeleros, gracias al peso de Miguel en el peronismo durante la campaña, todos hombres que dialogan con el oficialismo en las negociaciones de la ley sindical), para hacer llegar a las conducciones a las listas que apoyan el proyecto de reorganización sindical, que lo presionan para obtener alguna contrapartida por su apoyo, y que se espera que puedan ganar alguna posición con una virtual representación de las minorías. Las argumentaciones de “antidemocráticos” que se cruzan los distintos actores no dejan de tener, en todos los casos, un cierto asidero.

El 4 de febrero se lanza una importante huelga de conductores de larga distancia que incorporará una gran tensión en el horizonte político nacional. En plena temporada de vacaciones, los choferes decidieron mantener un paro prolongado para negociar condiciones laborales y aumento de salarios. Miles de turistas dormían en la terminal de Retiro esperando. El paro tenía una adhesión del 95% y se basaba en los agotadores horarios de trabajo. El gobierno dispuso la conciliación obligatoria en los primeros días, pero no fue acatada por la UTA y el conflicto se extendió a numerosas terminales del interior del país. El ministerio declara ilegal la huelga y la UTA marcha por el centro de la capital. A mediados de febrero el paro se hizo general, sumándose los choferes de corta y media distancia, pero las perspectivas eran desalentadoras. Al fin, el 15 el paro fue levantado a instancias de un plenario, en parte porque los choferes de corta y media distancia no tuvieron un alto acatamiento, y en parte porque la patronal se comprometió a reincorporar a los choferes cesanteados durante la huelga, promesa que no se cumplió.

Hacia 10 años que no se discutían condiciones laborales, y el conflicto de choferes era representativo de muchos de los conflictos reivindicativos que no dejaban de sucederse desde la decadencia del gobierno militar y que recrudecían mientras la política económica del gobierno no daba soluciones al proceso inflacionario, como el conflicto de 22 días en la fábrica de Terrabusi. Salvo en algunos casos puntuales, como el conflicto salarial de UOM, la lucha por la jornada de 6 horas en el subte o el de empacadores frutihortícolas en el alto valle de Río Negro, era muy difícil llegar a las conquistas por las que los conflictos se iniciaban.

4. A modo de balance.

Hemos reconstruido pormenorizadamente los posicionamientos y la evolución de los distintos actores políticos durante la coyuntura comprendida desde el resultado eleccionario hasta el rechazo en el senado del proyecto de ley. Reconstruimos la coyuntura completa de la presentación del proyecto de ley y desarrollamos las dinámicas que se desenvuelven entre el movimiento obrero y el estado (ya sea con el gobierno en sí como reuniones, negociaciones e intervenciones, o con instituciones como las dos cámaras del parlamento) y entre los distintos nucleamientos internos al movimiento

La fragmentación del sindicalismo fue sin duda uno de los puntos de diagnóstico que el alfonsinismo leyó erradamente para su ofensiva. De nuestra descripción se puede concluir que los mismos no responderían a cuestiones estructurales (como el rol de los sindicatos en la producción, por ejemplo) sino más bien que responden con bastante flexibilidad a factores coyunturales.

Podemos decir también que no fue la comprensión de las consecuencias de cambios en el nivel estructural (por ejemplo, los resultados estructurales de la crisis de los 60/70, o los efectos de la reestructuración capitalista impulsada por la dictadura militar y el bloque de clases dominantes) lo que empujaba el proyecto, sino la confusión de la situación coyuntural (la derrota del peronismo por primera vez en elecciones libres, la relativa debilidad de las conducciones peronistas sindicales) como resultado estructural. Por ello, la estrategia subsiguiente una vez derrotado el proyecto fue la negociación, pero con una CGT unificada y envalentonada por el triunfo coyuntural al retener el aparato burocrático sindical.

La derrota del peronismo en las elecciones de 1983 no implicó la “desperonización” de la sociedad argentina, y mucho menos del movimiento obrero. El alfonsinismo se perfiló como renovación viable para el bloque de clases dominantes pero impulsó un proyecto de hegemonía particular que se mostró inviable.

5. Bibliografía

- Abós, Álvaro (1984) *Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983)*. Buenos Aires, CEAL.
- Béliz, Gustavo (1988). *CGT, el otro poder*. Buenos Aires. Grupo Editorial Planeta.
- Campos, Luis (2008). *Estado y sindicatos: un análisis de sus relaciones a partir de los mecanismos de regulación y la conformación de la estructura sindical en Argentina (1943-1988)*. Tesis de maestría en economía política con mención en economía argentina. FLACSO.
- Fernández, Arturo Aquilino (1995). *Los roles del sindicalismo durante la transición democrática (1983-1995)*. Revista de ciencias sociales (Quilmes), Universidad Nacional de Quilmes, v. 3, p. 213-228.
- Gaudio, Ricardo y Domeniconi, Héctor (1986) *Las primeras elecciones sindicales en la transición democrática*. En *Desarrollo Económico*. Vol. 26. No. 103 (Oct.-Dic. 1986)
- Levitsky, Steven (2005) *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista.(1983-1999)*. Siglo XXI Editora Iberoamericana. Buenos Aires.
- Lucita, Eduardo (1984) 'Argentina: Reorganización del movimiento social y proyecto alternativo', *Cuadernos del Sur*, 1
- Nun, José y Juan Carlos Portantiero (comps.) *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*. Buenos Aires: Puntosur.
- Schneider, Alejandro (2006) *Los Compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo. 1955-1973*. Buenos Aires. Imago Mundi.